

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN -

Medellín, veintiséis (26) de septiembre dos mil veintitrés (2023)

Apelación auto

Exp.015-2023-00314-01

Vencido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, se resuelve el recurso de apelación interpuesto por BEATRÍZ MAYA ADARVE por medio de su mandataria judicial, contra el auto que libró mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo a continuación de ordinario que adelanta en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES-.

ANTECEDENTES:

BEATRÍZ MAYA ADARVE promovió demanda ejecutiva a fin de perseguir el pago de un reajuste pensional ordenado judicialmente a Colpensiones junto con los intereses moratorios, las costas del proceso ordinario y las que se fijen dentro del trámite ejecutivo. En igual oportunidad solicitó medida cautelar de embargo de diferentes cuentas bancarias cuya titularidad recae en la entidad.

Por auto del 17 de agosto de 2023 el Juzgado de Conocimiento, que lo es el Quince Laboral del Circuito de Medellín, libró mandamiento de pago contra Colpensiones en iguales términos a las sentencias de primera y segunda instancia emitidas, absteniéndose de decretar la medida cautelar pedida por

virtud de la inembargabilidad de las cuentas, según los informes recibidos por la dependencia de las distintas entidades crediticias.

La representante judicial de la activa se apartó de la decisión e interpuso recurso de reposición y en subsidio suyo el de apelación, aduciendo que la sentencia que sirvió de fundamento para la ejecución condenando a Pensiones de Antioquia no existe pues no es la demandada en el presente proceso, presentándose un error de transcripción en el acta que posteriormente fue corregido por auto del 18 de enero de 2021, por lo que la única sentencia que se constata en los audios es proferida contra Colpensiones para proceder con la reliquidación de la pensión de vejez una vez Pensiones de Antioquia proceda con el traslado de aportes, de donde solicitó la modificación del mandamiento de pago y el decreto de las medidas cautelares en tanto Colpensiones a dispuesto algunas cuentas para la ejecución de las obligaciones a su cargo.

El Juzgado se sostuvo en su determinación, por un lado, porque asiente que la orden de pago lo fue en contra de Colpensiones como es pedido; y por otro, porque la negativa para decretar la medida de embargo tuvo por base los informes enviados por la misma entidad y recientes pronunciamientos del superior, que dan cuenta de la inembargabilidad de las cuentas por provenir del Sistema General de Pensiones. conforme lo pregonan los artículos 48 y 63 de la Constitución Política, corroborado en el artículo 594 del CGP.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES:

Sea lo primero aclarar que la providencia cuestionada, es susceptible de la alzada conforme a lo previsto en los numerales 7° y 8° del artículo 65 del CPTSS, según los cuales, son recurribles a través de la apelación las decisiones de primer nivel que decidan sobre medidas cautelares y el mandamiento de pago.

Pues bien, lo primero por decir es que dado el conocimiento por apelación en vía directa a la decisión emitida por el Juzgado de Conocimiento, se precisa no tener entendimiento sobre el disentimiento respecto de la entidad sobre la que se impulsa el mandamiento ejecutivo, pues verificado el auto que promovió tal acción, lo que se denota es que está dirigido a Colpensiones y no a Pensiones de Antioquia como es referenciado en el recurso, por lo que aun cuando en la parte motiva de ese proveído se alude a una sentencia que da condena a Pensiones de Antioquia, lo cierto es que la parte resolutive referencia las sentencias de primera y segunda instancia resueltas en contra de la Administradora, la que claramente corresponde al contenido audible, pues es de allí de donde surgen las obligaciones impuestas y no de un acta escrita que por demás como se anunció por la parte ejecutante fue corregida dentro del proceso ordinario, por manera que en ese sentido no hay lugar a mayores elucubraciones, ni motivaciones para dar pronunciamiento de fondo al respecto.

Ahora, frente a la medida cautelar negada, se tiene que es necesario acudir a la regla de inembargabilidad sobre los recursos destinados a la seguridad social. En ese orden, el artículo 48 superior establece que los recursos de la seguridad social no podrán tener fines distintos, lo que se halla replicada en el literal m) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 que reza: *“Los recursos del Sistema General de Pensiones están destinados exclusivamente a dicho sistema y no pertenecen a la Nación, ni a las entidades que los administran”*

También el artículo 63 superior dispone: *“Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”*.

En igual línea, el artículo 134 de la Ley 100 de 1993 de manera específica reguló la inembargabilidad de los recursos administrados por el Seguro Social, al indicar: *“Son inembargables: ... 2. Los recursos de los fondos de reparto del régimen de prima media con prestación definida y sus respectivas reservas”*.

Este puntual asunto ha sido abordado por la autoridad constitucional, explicando que el principio de inembargabilidad tiene su sustento en la adecuada provisión, administración y manejo de los fondos necesarios para la protección de los derechos fundamentales y en general para el cumplimiento de los fines del Estado, viniendo con una línea jurisprudencial desde el año 1992 con estudio sobre el riesgo de la parálisis del Estado ante un abierto e indiscriminado embargo de recursos públicos, postura que se ha mantenido inalterada, lo que quiere decir que el Legislador tiene la facultad de señalar qué bienes no constituyen prenda general de garantía del Estado frente a sus acreedores y por lo tanto son inembargables en las controversias de orden judicial, pues se trata de una competencia asignada directamente por el Constituyente.

Es verdad que tal principio no es absoluto y de cara a otros valores, principios y valores se ha aceptado su flexibilización por parte de la H. Corte Suprema de Justicia dentro de trámites constitucionales, cuando ese carácter de inembargabilidad lesiona los derechos a la seguridad social, la vida, el mínimo vital y el pago oportuno de la pensión, donde cabe la ponderación de los intereses públicos con los derechos de los pensionados (Ver STL Rdo 39.987 de 2012, Rdo. 31.274 de 2013, Rdo. 55.327 de 2014 y Rdo. 86695 de 2019). Ello implica que la regla general que imposibilita el embargo de cuentas con destino al Sistema de Seguridad Social, se derribe ante la búsqueda del pago de una mesada pensional al constituirse como mecanismo de subsistencia de quien reclama, porque ello encamina a una evidente lesión al mínimo vital, eventos en los que el embargo procedería, pero en este caso Beatriz Maya Adarve no busca la efectividad de la prestación pues ya la disfruta, sino de su reliquidación, lo que muestra que no se adapta su situación concreta a los parámetros que por excepción se ha permitido para embargar las cuentas de la ejecutada, pues claramente no se están vulnerando sus derechos fundamentales.


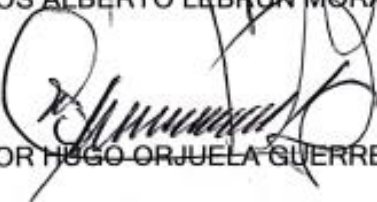
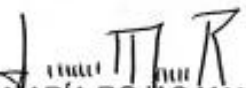
En ese orden de ideas, la decisión apelada y que fue adoptada por auto del 17 de agosto de 2023 debe confirmarse. Sin costas en la instancia.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, se **CONFIRMA** el auto objeto de apelación, de fecha y procedencia conocidas. Sin costas.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS**.

Los Magistrados,


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

Certifico: Que la sentencia anterior fue notificada por
ESTADOS N° 163 fijados el 27 de septiembre de 2023
en la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El Secretario.